

Economistas arremeten contra posible recorte laboral

Afirman que la economía local perderá sobre \$864 millones

martes, 1 de agosto de 2017 - 12:00 AM

Por [Yalixa Rivera Cruz](#)



José Caraballo Cueto, vicepresidente de la Asociación de Economistas. (Archivo / GFR Media)

Ante la posibilidad de que los empleados de gobierno se enfrenten a un recorte laboral, que tendría como consecuencia la reducción del 20% de su salario a partir del 1 de septiembre, la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) se unió ayer a la ola de críticas que ha recibido la medida propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al advertir que esto terminará por costarle a la economía del país pérdidas de unos \$864 millones anuales.

El economista y vicepresidente de la AEPR, José Caraballo Cueto, detalló que se trata de unos 100,000 empleados públicos que se verán impactados por la decisión de la JSF, que desencadenará en una reducción en los gastos de consumo y por consiguiente también afectará

a los comercios del país.

PUBLICIDAD

“Según la misma Junta ha establecido como impacto directo en salarios, solamente son unos \$480 millones que no se pagarán ante la reducción en nómina. Sumando el impacto indirecto por el dinero que se dejará de gastar en consumo y la reducción que tendrán los negocios, se estiman que serán sobre \$864 millones”, afirmó Caraballo Cueto en entrevista telefónica con **El Nuevo Día**.

“Estamos hablando de hundir aún más la economía en el hoyo en el que se encuentra”, agregó.

Por su parte, la presidenta de dicha asociación, Martha Quiñones, señaló que “esta reducción impone algo similar a un impuesto de 20% mensual, que aunque no está definido, en la práctica los hace un 20% más pobre. La pregunta es si los jefes y contratistas de las agencias del gobierno y de la Junta de Control Fiscal tendrán el 20% de recorte también. Si las empresas que gozan de subsidios gubernamentales también sufrirán el 20% de recorte o la total eliminación de ese mantengo corporativo”.

Según Quiñones, el empleado público del gobierno central aporta más que los empleados de las corporaciones públicas, donde los salarios son mayores y más que otros sectores en Puerto Rico. Al tiempo, advirtió que lo que traerá como consecuencia es que muchas personas no puedan cumplir con sus obligaciones financieras porque no tendrán los ingresos suficientes. “Esto también reducirá la capacidad de consumo de cada uno de ellos, lo que afectará directamente al pequeño y mediano comerciante”, añadió.

La presidenta sugirió que la mejor forma de empezar por los recortes es identificando dónde se está desperdiciando el dinero del gobierno, el cual afirmó no es necesariamente en los empleados públicos que son los que están produciendo.

Una de las propuestas de los economistas es que se imponga un tope de salario a los jefes de agencias para que no se le puedan otorgar cantidades exageradas como son los sueldos que devengan la secretaria de educación Julia Keleher, cuyo sueldo anual alcanza los \$250,000, o el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quien gana \$248,500.

“Que empiecen por estas personas a reducirle el 20% y con los demás jefes de agencia”, dijo.

Estas medidas deben ir acompañadas de la reducción en los contratos de asesoría, señaló Quiñones.

La Asociación reiteró su defensa a las recomendaciones que se desprenden de su encuesta, respaldada por la mayoría de los economistas del país y hecha pública el 20 de febrero de 2017. Entre ellas, se encuentra que el 93% de los economistas favorece que se eliminen subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleo, el 78% favorece que se aumenten los

impuestos a los bienes y servicios de lujo, un 69% apoya que se detenga el mecanismo contable conocido como “transfer pricing” de las megatiendas (punto que también es favorecido por la Cámara de Comercio de Puerto Rico) y un 61% entiende que se deben retasar las propiedades inmuebles.

PUBLICIDAD

Ambos economistas advirtieron que no conforme con la reducción en salarios, el recorte afectará también muchos servicios esenciales que PROMESA indica que se deben proteger tales como la educación y la salud.

Además de los economistas, otras organizaciones privadas como la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) también han lanzado sus advertencias sobre las consecuencias negativas de la propuesta de la JSF.

La vicepresidenta ejecutiva de dicha entidad, Zoimé Álvarez Rubio, reconoció el impacto económico que tendrían para las familias puertorriqueñas que trabajan en el sector público, con la propuesta de reducción de la jornada laboral; específicamente, en cuanto al cumplimiento de sus compromisos financieros contraídos que incluyen casa, autos y préstamos personales, entre otros.

“Tanto para la banca, como para otras industrias, el reto mayor sigue siendo la falta de crecimiento económico. No obstante, estamos confiados en la capacidad de nuestros bancos miembros para poder enfrentar este panorama fiscal y continuar apoyando a Puerto Rico”, sostuvo.

El Nuevo Día supo ayer que la JSF emitirá un comunicado hoy para anunciar la fecha de su próxima reunión que será este viernes, 4 de agosto, en el hotel El Conquistador en Fajardo. Se espera que uno de los temas que se discuta en la agenda del día sea precisamente la reducción de jornada laboral para los empleados públicos.

No obstante, la JSF podría estar considerando no implementar dicha medida a raíz de los recortes ya propuestos por el gobernador Ricardo Rosselló, supo este diario.